



Expediente N°: E/07072/2013

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante D. **C.C.C.** en virtud de denuncia presentada por D. **B.B.B.** y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 8 de agosto de 2013 tiene entrada en esta Agencia escrito de D. **B.B.B.** (en adelante el denunciante), comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, motivada por cámaras de videovigilancia cuyo titular es D. **C.C.C.** (en adelante el denunciado) instaladas en el inmueble sito en **D.D.D. A.A.A.)**.

En la denuncia el denunciante expone que el denunciado instaló unas videocámaras en la propiedad de dicho denunciado, pero enfocando a la suya (a la del denunciante).

A la denuncia acompaña reportaje fotográfico.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 7 de enero de 2014, en el marco de las actuaciones practicadas por la Subdirección General de Inspección de Datos, se requirió al denunciado para que aportara diversa información respecto al sistema de videovigilancia denunciado.

Dicho requerimiento no fue atendido, al resultar fallida su entrega por el servicio de correos, según consta en el expediente, figurando como motivo que el denunciado se encontraba "ausente" en el momento de realizarse las pretendidas notificaciones.

2. Con fecha 30 de enero de 2014, se remite solicitud de colaboración a la Guardia Civil de NOIA (A CORUÑA), a los efectos de que, personándose en el lugar en el que se encuentran las cámaras a las que se refiere la denuncia, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, procediera a realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos a los que se refería el requerimiento realizado al propio denunciante.

A su vez, en dicha solicitud de colaboración, se solicitaba que –por la Guardia Civil de NOIA– se procediese a acompañar, además, fotografías tomadas por la propia Fuerza actuante sobre la vivienda en la que se encuentran instaladas las cámaras, así como que se procediera a la confección de un croquis con la relación y ubicación de dichas cámaras.

Con fecha de entrada en la Agencia de 13 de febrero de 2014, la Guardia Civil de NOIA remite informe por ella elaborado en relación con la solicitud de colaboración de la Agencia, del que se desprende lo siguiente:

“Una vez en el lugar de los hechos, se observa un galpón, con una finca anexa y parte trasera del mismo, donde hay unos artefactos, con objetivos, al parecer simulando cámaras de video.

Que dicho galpón pertenece a un particular, D. **C.C.C.** (NIF ...) nacido el (...), con domicilio en (.....) de la localidad de LOUSAME (A Coruña), y con teléfono (...).

Que entrevistados la Fuerza Actuante, con el denunciado, este manifestó que ha instalado dichas cámaras simuladas, para proteger su propiedad que no tiene ningún sistema de grabación, que las ha instalado él, que son simuladas, que carece de letrero alguno para indicar su existencia y de los derechos que corresponden a los ciudadanos.

La Guardia Civil actuante, adjunta reportaje fotográfico comentado, comprensivo de un total de seis fotografías, en relación con las cuales se realizan las siguientes observaciones:

“INFORME FOTOGRÁFICO DE ARTEFACTOS SIMULANDO CÁMARAS

FOTO Nº 1-2: Vista general, parte delantera compuesta por parcela y galpón del (denunciante) donde se puede apreciar una cámara, la cual se indica con una flecha.

FOTO Nº 3: Detalle artefacto-cámara sita en parte delantera del galpón.

FOTO Nº 4: Foto parte trasera del galpón, donde se pueden apreciar dos artefactos, simulando una cámara, las flechas indican su posición.

FOTO Nº 5: Imagen donde se puede apreciar el detalle del artefacto 2 de la foto 4, al cual no se le aprecian cables de salida. (Parece) ser una caja de empalmes con un objetivo de una cámara fotográfica.

FOTO Nº 6: Detalle artefacto cámara simulada, compuesto por visor de cámara de video.”

A la vista del informe emitido por la Guardia Civil de NOIA, se puede aseverar que las cámaras a las que se refiere la denuncia son SIMULADAS (artefactos en los que no se aprecian cables de salida, compuestos por diverso material que, de manera ficticia, simula la existencia de cámaras y/o videocámaras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo, procede situar la materia de videovigilancia en su contexto normativo.

Así, el artículo 1 de la LOPD dispone: *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”*

En cuanto al ámbito de aplicación de la LOPD, el artículo 2.1 de la misma señala: *“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”,* definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*.

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal *“toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*. Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla.

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines de videovigilancia señala que: *“La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”*. Sigue señalando: *“Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999...”*.

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

Por su parte, la citada Instrucción 1/2006, dispone en su artículo 1.1 lo siguiente:

“1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

La Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente:

“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable, por lo que la imagen de una persona física identificada o identificable constituye un dato de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas que las hacen identificadas o identificables y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere.

III

En el presente expediente, D. **B.B.B.** denuncia la existencia de cámaras de videovigilancia en la vivienda del denunciado, orientadas hacia la propiedad del denunciante.

Ante dicha denuncia, con fecha 30 de enero de 2014, la Inspección de Datos de esta Agencia remite solicitud de colaboración a la Guardia Civil de NOIA (A CORUÑA), a los efectos de que, personándose en el lugar en el que se encuentran las cámaras a las que se refiere la denuncia, procediera a realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar diversos aspectos del sistema de videovigilancia denunciado.

Con fecha de entrada en la Agencia de 13 de febrero de 2014, la Guardia Civil de NOIA remite informe por ella elaborado en relación con la solicitud de colaboración de la Agencia, del que se desprende lo siguiente:

“Una vez en el lugar de los hechos, se observa un galpón, con una finca anexa y parte trasera del mismo, donde hay unos artefactos, con objetivos, al parecer simulando cámaras de video.

Que dicho galpón pertenece a un particular, D. **C.C.C.** (NIF ...) nacido el (...), con domicilio en (.....) de la localidad de LOUSAME (A Coruña), y con teléfono (...).

Que entrevistados la Fuerza Actuante, con el denunciado, este manifestó que ha instalado dichas cámaras simuladas, para proteger su propiedad que no tiene ningún sistema de grabación, que las ha instalado él, que son simuladas, que carece de letrero alguno para indicar su existencia y de los derechos que corresponden a los ciudadanos.

La Guardia Civil actuante, adjunta reportaje fotográfico comentado, comprensivo de un total de seis fotografías, en relación con las cuales se realizan las siguientes observaciones:

“FOTO Nº 1-2: Vista general, parte delantera compuesta por parcela y galpón del (denunciante) donde se puede apreciar una cámara, la cual se indica con una flecha.

FOTO Nº 3: Detalle artefacto-cámara sita en parte delantera del galpón.

FOTO Nº 4: Foto parte trasera del galpón, donde se pueden apreciar dos artefactos, simulando una cámara, las flechas indican su posición.

FOTO Nº 5: Imagen donde se puede apreciar el detalle del artefacto 2 de la foto 4, al cual no se le aprecian cables de salida. (Parece) ser una caja de empalmes con un objetivo de una cámara fotográfica.

FOTO Nº 6: Detalle artefacto cámara simulada, compuesto por visor de cámara de video.”

A la vista del informe emitido por la Guardia Civil de NOIA, se puede aseverar que las cámaras a las que se refiere la denuncia son simuladas (artefactos en los que no se aprecian cables de salida, compuestos por diverso material que, de manera ficticia, simula la existencia de cámaras y/o videocámaras.

A este respecto, no puede obviarse que al Derecho Administrativo Sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de

presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del *ius puniendi* en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta *“que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”*. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo sucesivo LRJPAC), establece que *“Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”*

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de inocencia *“no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”*

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que *“Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.”*

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor.

A la vista de lo expuesto, al tratarse de cámaras simuladas no captarían ni

grabarían imagen alguna, por lo que atendiendo al principio de presunción de inocencia, procede el archivo del presente expediente de actuaciones previas.

No obstante, la ubicación de dichas cámaras, enfocadas a espacios sustraídos del ámbito privado, genera una expectativa de captación de imágenes de las personas que circulan por dichos espacios que supone una afectación de sus derechos. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los apartados a) y f) del artículo 37 de la LOPD, se le requiere formalmente para que retire o redirija la cámara para que enfoquen únicamente al interior de su propiedad.

Asimismo señalar que sería legítima la instalación de cámaras de videovigilancia, no estando sometida a la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal ni a la Instrucción 1/2006, si el tratamiento de imágenes de las personas físicas se realizara en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, es decir si las cámaras se encontraran instaladas en una propiedad o domicilio privado captando espacios exclusivamente propiedad de éste, pues tales captaciones tendrían un carácter doméstico y, quedarían amparadas en la excepción prevista en el artículo 2.2.a) de la *Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal*., toda vez que el tratamiento resultante de las imágenes captadas se circunscribiría al ejercicio exclusivo de actividades domésticas.

A este respecto, el artículo 2.1 y 2 a) de la LOPD, establece lo siguiente:

“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

“2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación:

a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

**Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
SE ACUERDA:**

PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

NOTIFICAR la presente Resolución a D. **C.C.C.** y a D. **B.B.B..**

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos